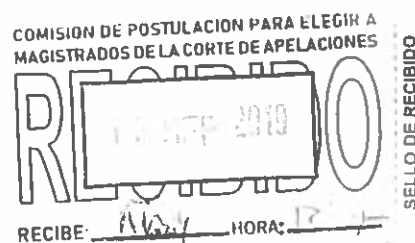




## ENTREGA DE IMPEDIMENTO (S)



Nombre del postulante: NICOLÁS BALAN ESTRADA

Expediente No.: 874

Nombre del denunciante (individual o jurídico): Nelson Geovani Alvarez Tula

DPI No.: 1820 63852 1406 Representación legal: \_\_\_\_\_

Si comparece en representación de persona jurídica, acredita su calidad: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

• DESCRIPCIÓN DEL ACTO (S) DENUNCIADO (S):

Por falta de honorabilidad

• MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITA:

\* Copia simple sentencia No. de fecha 13  
noviembre 2018. Amparo No. 1200-  
2018-00145.

Guatemala, 12 de septiembre de 2019

NOMBRE (de quien entrega): Nelson Geovani Alvarez  
DPI (de quien entrega): 1820 63852 1406 FIRMA: [Firma]

## **SEÑORAS Y SEÑORES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA PARA EL PERÍODO DOS MIL DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO.**

**NELSON GEOVANI ALVAREZ TOBAR**, de treinta y ocho años de edad, soltero, guatemalteco, dirigente sindical, de este domicilio y vecindad, identificado con el Documento Personal de Identificación, Código único de Identificación un mil ochocientos veinte espacio sesenta y tres mil ochocientos sesenta y dos espacio un mil cuatrocientos seis (1820 63852 1406) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; señalo como lugar de residencia y para recibir notificaciones para los efectos de este proceso la sede de mi Central Sindical, **MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-** ubicada en la quinta (5ª) avenida, diez guion sesenta y ocho (10-68), Oficina quinientos once (511) Quinto Nivel del Edificio Helvetia, zona uno (1) del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, así también el número de teléfono 22305282 y el correo electrónico [movimientosicg@gmail.com](mailto:movimientosicg@gmail.com), por este medio comparezco ante ustedes con el objeto de poner en conocimiento de esa **COMISIÓN IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDO EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES U OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA DE LA PERSONA DE NICOLÁS BALAN ESTRADA** y para el efecto:

### **I. EXPONGO**

- 1. El Artículo 113 de la Constitución Política** establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
- 2. El Artículo 207 de la Constitución** establece que los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.
- 3. El Artículo 13 del Decreto del Congreso de la República 19-2009 Ley de Comisiones de Postulación** preceptúa que en congruencia con la Constitución Política de la República, leyes constitucionales, leyes ordinarias aplicables y lo dispuesto en el mismo Decreto, las Comisiones verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos que deberán satisfacer los participantes. La falta de cumplimiento de requisitos será causal suficiente para excluir a cualquier participante de la nómina respectiva.
- 4. La Corte de Constitucionalidad** al referirse al requisito **reconocida honorabilidad** ha considerado que "...B) Conforme lo indicado en el párrafo anterior, tenemos que la "honorabilidad" es un concepto eminentemente filosófico que proviene del vocablo "honor", predominantemente arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de definirla como la cualidad que tienen los actos de los seres humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, **es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por**

el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas. En el campo del derecho, el honor (de donde proviene la honorabilidad) tiene su relevancia por cuanto es tomado por ciertas ramas de las ciencias jurídicas, como por ejemplo en la civil y penal, en donde el honor o la honorabilidad son tutelados en un alto grado que, su vulneración o violación, puede ser impedimento para ejercer determinados actos o bien ser sancionado con una pena. C) Ahora bien, cuando se habla de que la honorabilidad debe ser "reconocida", se está haciendo alusión a que las cualidades (a que se hacen referencia) de una persona, son de conocimiento de toda la sociedad o bien, de un segmento de la misma, que la muestra a aquella por lo que es en cuanto a sus méritos, talentos, destrezas, habilidades, criterio y cualidades humanas, que buscarán y procuraran la correcta aplicación de las normas o las leyes y, con ello, la justicia, y que esa actuación de la persona en el ejercicio del cargo público que pudiera ocupar, cumpla con garantizar a los habitantes de la nación, la protección a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (...) IV. Conforme lo relacionado, la "reconocida honorabilidad" es un aspecto abstracto que sólo se puede comprender de una manera intelectual y que, ni en la práctica ni en las normas constitucionales indicadas, está definida la forma de comprobarla, ni mucho menos asignarle un valor. Al respecto, este Tribunal, en cuanto a la comprobación de la "reconocida honorabilidad", dentro del expediente tres mil quinientos treinta y seis - dos mil nueve (3536-2009) referido, indicó lo siguiente: "...En el Expediente 3690-2009 (auto de cuatro de octubre de dos mil nueve) esta Corte precisó una serie de aspectos que nutrirán este fallo, lo que permite no sólo la reiteración de algunos criterios ya sostenidos con anterioridad (Cf. Expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003; Expedientes 273-91, 205-94 y 300-99) sino también la elaboración de un corpus doctrinal que oriente el actuar del poder público, cuando se le exija -para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar sobre el aspecto „reconocida honorabilidad“... sobre la cual esta Corte se ha pronunciado con anterioridad... en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.>> Para efectos de este fallo, la comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, se lista en literales, así: **A) Acreditaciones: la presentación de documentos o certificaciones**". B) Criterios sociales: „la buena conducta profesional, la estima gremial, el Expediente 942-2010 9 reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el debido respeto al principio de presunción de inocencia". C) Repercusiones en el actuar: „tanto en lo profesional (si es que el candidato proviene del sector del ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública; en el caso de mérito con la judicatura". D) Respeto a la intimidad: „De no ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos de la intimidad personal o a la esfera del derecho a la propia imagen (derivado del contenido de los artículos 4 y 5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la reconocida honorabilidad y lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión constitucional en lo que a este aspecto atañe". E) Criterios de organismos internacionales: <>. F) Legislación ordinaria: <>. G) Criterios complementarios: la exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina „Guía de buenas prácticas" a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó esta Corte en el Expediente 2409- 2009, Sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil nueve, al considerar: „debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público". También deberá tomarse en cuenta lo resuelto en la Opinión Consultiva 3755-2009, de siete de octubre de dos mil nueve, en cuanto a las preguntas formuladas por el Congreso de la República a esta Expediente 942-2010 10 Corte, sobre la

substitución de aquellos candidatos ya electos, con base en „pruebas fehacientes“ y „qué denuncias son fundamentadas (...) sin que ello signifique violar el principio de inocencia, el derecho de defensa y el precepto constitucional que establece que la potestad de juzgar corresponde a los tribunales de justicia, que ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia y que ello no atenta contra la independencia del Organismo Judicial“... En los casos de elecciones que en la Constitución Política de la República o en las leyes complementarias de jerarquía constitucional no se encuentren expresamente reguladas, la legislación ordinaria puede establecer precedentes que la legislación autorice, siempre dentro del marco de valores que el sistema constitucional proclame como sustanciales... en particular, porque los requisitos profesionales y éticos que la Constitución establece para optar a tal dignidad constituyen características individuales... siendo ideal que la designación se haga bajo la estricta responsabilidad moral de los electores, habida cuenta que condiciones esenciales de la vida humana, como la libertad, la igualdad, la propiedad e incluso la vida misma, pueden estar sometidos a la prudencia, enjundia, carácter y probidad de la administración de justicia. Es atendiendo a esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y éticos con los que debe cumplir cada aspirante, deben ser calificados con especial rigorismo, en atención a que una persona es honorable o no lo es y por ende lógicamente no existen categorías en cuanto a honorabilidad se refiere: -menos honorable, más honorable, o medio honorable...” [Sentencia de fecha 24 de agosto de 2010 dictada dentro del Expediente 942-2010]. Las negrillas son propias.

## **II. DEL IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDO EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE DE APELACIONES U OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA DE LA PERSONA DE NICOLÁS BALAN ESTRADA**

1. La persona de **NICOLÁS BALAN ESTRADA** en su calidad de Juez Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social durante su desempeño como Juez ha evidenciado una incorrecta aplicación de las leyes, parcialización en la administración de justicia, su inclinación a la promover la injusticia y ha actuado de manera consecuente para ejecutar actos prohibidos por las leyes y la Constitución.
2. Para ejemplificar lo expuesto se trae a colación la actuación de **NICOLÁS BALAN ESTRADA** demorando la ejecución de una sentencia firme y ejecutoriada y actuado de manera arbitraria en violación del debido proceso y en exceso de sus facultades como Juez de trabajo y previsión social a los efectos de favorecer a una de las partes en el proceso identificado como Juicio Ordinario Laboral 01173-2012-06131, ha coaccionado al trabajador demandante a los efectos de imponerle la suscripción de documentos a través de los cuales se legitima el uso de recursos destinados en el presupuesto general de la nación a un rubro distinto para el que fueron destinados.
3. En el proceso identificado como Juicio Ordinario Laboral 01173-2012-06131, mediante memorial de fecha 10 de julio de 2018, la entidad patronal que había ya sido vencida en juicio por el trabajador en sentencia firme y ejecutoriada, en lugar de acreditar el debido cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, presentó al juez requerimiento de que se citara a las partes para una audiencia conciliatoria.
4. A pesar de que la etapa de ejecución de los procesos laborales no contempla una audiencia conciliatoria, de que la conciliación como etapa del juicio ordinario laboral está vinculada a un momento procesal específico que en este caso había precluido y de que lo que procedía ante el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia era certificar lo conducente contra quienes resultaran responsables por el incumplimiento, el juez emitió la resolución fechada 11 de julio de 2018 señalando una audiencia para el 27 de julio de 2018 a las 10:00 horas estableciendo que esta audiencia se señalaba “a efectos de llegar a una posible conciliación”.

5. Esto fue protestado por el trabajador porque habiendo sentencia firme y ejecutoriada, la función del Juez constitucionalmente asignada era la de ejecutar lo resuelto, no conciliar ni retrotraer el proceso a etapas fenecidas. No obstante, como el carácter de la audiencia era conciliatoria, lo que presuponía la limitación del juez a proponer formulas ecuanímes de arreglo, sin la posibilidad de imponerlas a las partes mediante actos resolutivos, se presentó un memorial protestando y excusándose de asistir a dicha audiencia.
6. Mediante resolución de fecha 24 de julio de 2018, el mismo juez reprograma la audiencia para el 3 de agosto de 2018 a las 10:00 horas "...a efectos de llegar a una posible conciliación".
7. Ante la insistencia del Juez en su negativa de ejecutar la sentencia y no haberle dejado opción legal alguna al trabajador más que asistir a la audiencia programada al margen del debido proceso, el trabajador debió asistir a la audiencia reiterando la protesta presentada por escrito mediante memorial fechado 23 de julio de 2018.
8. Al abrir la audiencia, la persona de **NICOLÁS BALAN ESTRADA** en su calidad de Juez Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social obviando que la audiencia fue convocada con carácter conciliatorio, para ejecutar sus fines coactivos sobre el trabajador modificó la naturaleza de esta al iniciarla y abrió como una audiencia de verificación del cumplimiento de la sentencia; etapa procesal que tampoco existe en el debido proceso, pero que tampoco le otorga la facultad de resolver sobre el fondo ya resuelto y ejecutoriado del proceso, a pesar de ello, abrió el proceso a un debate en el que incluso recurre a la aseveración de extremos apartados de la veracidad de lo ocurrido en la propia audiencia y en sendas contradicciones con la finalidad de coaccionar al trabajador para suscribir un documento que inserta datos falsos relativos a la fecha de inicio y finalización de la relación laboral y que limita, restringe y anula los derechos del trabajador declarados en juicio en sentencia firme y ejecutoriada.
9. Ante la arbitrariedad de tal actuación, la parte laboral debió acudir por la vía del amparo en contra del citado Juez, este amparo fue conocido por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo dentro del Expediente de Amparo 1200-2018-00145 la que dictando sentencia con fecha 13 de marzo de 2018 declaró arbitraria la actuación del Juez décimo tercero de trabajo y previsión social **NICOLÁS BALAN ESTRADA**, dejando en suspenso el acto reclamado y ordenándole apegarse al debido proceso para cumplir sin alterar la sentencia ejecutada.
10. La falta de honorabilidad de la persona de **NICOLÁS BALAN ESTRADA** se encuentra documentada en la: **a)** Copia simple de la Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2018 dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo dentro del Expediente de Amparo número 1200-2018-00145 que acompaño a este memorial; y **b)** Copia de la grabación de la audiencia de fecha 3 de agosto de 2018, celebrada a partir de las 10:00 horas dentro del Juicio ordinario laboral número 01173-2012-06131 del Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión social que debe ser requerida al Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social.
11. Esta resolución denota la existencia de elementos suficientes para permitir a otro órgano jurisdiccional asimilar como arbitrario el accionar de **NICOLÁS BALAN ESTRADA** en su calidad de Juez Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social y el valorar tal extremo en función de determinar la honorabilidad del aspirante, al tenor de los criterios decantados por la Corte de Constitucionalidad no implica violación del derecho defensa, de la presunción de inocencia ni una usurpación de las funciones jurisdiccionales en virtud de que este procedimiento tiene como único objeto determinar la idoneidad de los aspirantes con base a pruebas fehacientes que permitan establecer si su imparcialidad está comprometida y si cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Probidad, Ley del Organismo Judicial y los convenios internacionales aceptados y ratificados con Guatemala relacionados con el tema y esa Comisión no tiene facultades para actuar en ejercicio de una función jurisdiccional, sino simplemente valorando, en acatamiento de lo dispuesto constitucionalmente en este caso la falta de honorabilidad de **NICOLÁS BALAN ESTRADA**.
12. Sobre este aspecto ya se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en la Opinión consultiva de fecha 7 de octubre de 2009, dentro del Expediente Número 3755-2009.

### **III. ACREDITACIÓN DE LA FALTA DE HONORABILIDAD DE LA PERSONA DE NICOLÁS BALAN ESTRADA**

1. Copia simple de la Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2018 dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo dentro del Expediente de Amparo número 1200-2018-00145 que acompaño a este memorial

### **IV. DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER REQUERIDOS POR ESA COMISIÓN SI A PESAR DE LAS ACREDITACIONES PRESENTADAS LO CONSIDERA NECESARIO**

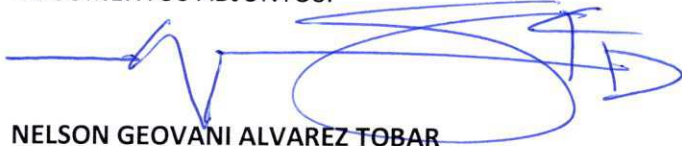
1. Copia de la grabación de la audiencia de fecha 3 de agosto de 2018, celebrada a partir de las 10:00 horas dentro del Juicio ordinario laboral número 01173-2012-06131 del Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión social que debe ser requerida al Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social.

### **V. SOLICITO**

1. Que se tenga por presentado este memorial y documentos adjuntos y se inicie el expediente respectivo.
2. Se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones.
3. Se tenga por puesto en conocimiento de esa Comisión **IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDO EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA PARA EL PERÍODO 2019-2024 DE LA PERSONA DE NICOLÁS BALAN ESTRADA.**
4. Se procedan a conocer los hechos puestos en conocimiento de esa Comisión relativos al impedimento por falta de honorabilidad para ser incluido en la Nómina de Candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte de Apelaciones u otros Tribunales de igual categoría para el Período 2019-2024 de la persona de NICOLÁS BALAN ESTRADA los cuales se encuentran plena y fehacientemente documentados.
5. Se excluya a la persona de NICOLÁS BALAN ESTRADA de la Nómina de Candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría para el período 2019-2024 de la persona por no ser una persona honorable.

Guatemala, 12 de septiembre de 2019.

ORIGINAL Y UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL, DOCUMENTO ADJUNTO, COPIA DEL DPI DEL COMPARECIENTE Y DVD CONTENIENDO EN ARCHIVO PDF LA PRESENTE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.



**NELSON GEOVANI ALVAREZ TOBAR**



CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA LABORAL  
ORGANISMO JUDICIAL

Cédula No.: 01200-142190630

SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE  
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA

Expediente No.: 01200-2018-00145



\*142190630\*



\*01200\*



\*01200-2018-00145\*



\*792202663\*

REF.

Expediente asignado al SALA QUINTA DE LA CORTE DE  
APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

TIPO PROCESO: Constitucional Amparo Laboral Sin Subclase

En la ciudad de Guatemala, el Cinco de Febrero del año

diecinueve de las once horas con

veinte minutos, en:

QUINTA AVENIDA, DIEZ GUION SESENTA Y OCHO, OFICINA QUINIENTOS ONCE, QUINTO NIVEL,  
EDIFICIO HELVETIA., GUATEMALA ZONA UNO.

Notifico la(s) resolución (es) de fecha (s):

TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE CONTIENE SENTENCIA

NOVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE CONTIENE EVACUA AUDIENCIA SEGUNDA  
CUARENTA Y OCHO HORAS

V. CARLOS ERNESTO SANCHEZ CACERES (Recurrente)

Por Medio de cédula de notificación que contiene las copias de Ley y que entrego a:

Admiral Sandoval

Quien de enterado si firmó, DOY FE:

no se llevo a cabo la notificación, por la causa siguiente:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> dirección inexacta | <input type="checkbox"/> no existe la dirección | <input type="checkbox"/> persona a notificar falleció |
| <input type="checkbox"/> lugar desocupado   | <input type="checkbox"/> persona fuera del país | <input type="checkbox"/> datos no concuerdan          |

FECHA DE ENVIO: 02/02/2019 08:35:29a.m.

CONSTA DE 14 FOLIOS

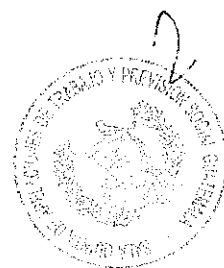
Fecha Recepción

imprime JESSICA CRISTINA RUIZ FLORES

Fecha Impresión: 04/02/2019 - 9:42







**AMPARO 01200-2018-00145. Oficial 4º. CARLOS ERNESTO SÁNCHEZ CÁCERES**  
**contra JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

**SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO. Guatemala, trece de noviembre de dos mil**  
**dieciocho.**-----

Se tiene a la vista para dictar **sentencia** en la **ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO**  
cuyas referencias son las siguientes:

**SOLICITANTE: CARLOS ERNESTO SÁNCHEZ CÁCERES**

**AUTORIDAD IMPUGNADA: JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y**  
**PREVISIÓN SOCIAL**

**MINISTERIO PÚBLICO:** Fue representado por medio de su Agente Fiscal: LICDA. GILDA  
TOLEDO BARRIOS

**TERCEROS INTERESADOS:**

**PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS:** actuó bajo la dirección y  
procuración de los Abogados Roberto Samuel Solórzano Hernández y Edwin  
Rolando Chávez Chamalé

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** quien actuó bajo la dirección y procuración  
del Abogado Luis Alberto Sosa Avendaño

#### **FUNDAMENTO DEL AMPARO:**

**ANTECEDENTES DEL AMPARO:** Indica el amparista que dentro del juicio ordinario laboral  
identificado con el número cero un mil ciento setenta y tres, guión dos mil doce, guión cero  
seis mil ciento treinta y uno, en fase de ejecución, al producirse la negativa de la entidad  
patronal a dar cumplimiento de la sentencia, intenta forzar al trabajador a aceptar una nueva  
simulación de su relación laboral, manifestando que fingió reinstalarlo para hacerse trabajar  
sin percibir salario, como medida de coacción para obligarle a firmar un contrato de servicios



profesionales. Indica que esto fue denunciado a la autoridad impugnada, y no se tomaron las medidas efectivas, incluso, la entidad patronal, presentó una solicitud para que se convocara a una audiencia conciliatoria, la cual fue convocada por el tribunal a pesar de existir un fallo ejecutoriado y no caber la conciliación como etapa de un procedimiento ejecutivo. Argumenta que el trabajador protestó por la alteración del debido proceso y se excusó a la audiencia señalada, la cual fue reprogramada para el día tres de agosto de dos mil dieciocho, que si fue diligenciada, pero, la autoridad impugnada inicia la audiencia como una si fuera una verificación del cumplimiento de sentencias, durante la misma, el juzgador a pesar de que la sentencia ordena reinstalar en las condiciones laborales prevalecientes al momento del despido, es decir, en una relación laboral a plazo indeterminado, el juez ordenó inicialmente reinstalar al trabajador en renglón 022, ante esto la entidad patronal se opuso y la audiencia se convirtió en una discusión entre ambas partes, a efecto de determinar la forma de contratación que se impondría al trabajador, y mediante la cual se utilizarían recursos presupuestarios destinados a cubrir gastos derivados de servicios motivados por necesidades de naturaleza temporal, a cubrir los gastos derivados de una relación que, como fue declarado en la sentencia, eran producto de una contratación destinada a cubrir necesidades de naturaleza continua e ininterrumpida de la relación, excediendo los límites formales impuestos de manera simulada mediante los respectivos contratos. Finalmente, obviando que el trabajador ha sido sometido a una coacción desde que se ejecutó la reinstalación al no hacerle efectivo el pago del salario, caracterizada por la imposición de condiciones laborales asimilables al trabajo forzoso, como le fue denunciado por el trabajador, para legitimar esta conducta, ordena al trabajador aceptar una reinstalación, en condiciones que violan lo ordenado en la sentencia, al someter al trabajador a una contratación temporal por jornal con cargo al renglón presupuestario 031 como lo acordó el juzgador con la entidad patronal. En sentido, argumenta que al Juez no le está legalmente



permitido entrar a determinar aspectos del fondo del proceso debiendo limitarse a garantizar la positivización de la sentencia ejecutada que en este caso, establece que el trabajador debe ser reubicado en su mismo puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones que las prevalecientes al ser despedido; que, como fue declarado en la sentencia, presupone la existencia de una relación de naturaleza laboral por plazo indefinido, de esa cuenta, al vulnerar el debido proceso y emitir una resolución que impone al trabajador una contratación de naturaleza temporal y un pago por jornal diario, además de todas la irregularidades que ya se apuntaron vulnera el derecho del debido proceso y la tutela judicial efectiva del trabajador, puesto que incumple con ejecutar la sentencia en los términos en que ha quedado firme y ejecutoriada.

**ARGUMENTACIONES Y VIOLACIONES QUE SE DENUNCIAN:** el amparista denuncia como vulnerados, el debido proceso, tutela judicial efectiva, legalidad, tutelaridad, irrenunciabilidad, derecho al trabajo, no discriminación, consagrados en los artículos: 2, 5, 12, 44, 46, 102, 103, 106, 152, 154, 155, 203, 204, 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 2, 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 8, 24, 25, 26, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo.

**OBJETO CONCRETO DEL AMPARO** el amparista busca a través de la presente acción de amparo, dejar en suspenso el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria dictada como conclusión de la audiencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, y mediante la cual ordena al trabajador someterse contra su voluntad a una contratación temporal y a un cambio de condiciones de trabajo al establecer su remuneración por jornal, lo cual incumple con la debida ejecución de la sentencia recaída y somete a la indefensión del trabajador al eliminar la protección de la tutela judicial efectiva sobre sus derechos humanos laborales y para los efectos positivos del mismo ordene a la autoridad impugnada



cumplir debidamente con la función ejecutiva del presente proceso hasta obtener el debido, pleno y efectivo cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que se ejecuta, sin perjuicio de las declaraciones que pueda estimar el tribunal necesarias para que se deduzcan otras posibles responsabilidades.

**ACTO RECLAMADO:** "lo constituye la resolución interlocutoria dictada como conclusión de la audiencia de fecha 3 de agosto de 2018 celebrada a partir de las 10:00 dentro del proceso identificado como ORDINARIO LABORAL 01173-2012-06131".

**AGOTAMIENTO DE RECURSOS:** indicó el amparista que el acto reclamado, tiene la característica de definitiva y no es susceptible de ser atacada por otro medio de impugnación.

**CASOS DE PROCEDENCIA:** la presente acción constitucional se invocan como casos de procedencia el artículo 10 literales a, d, y h de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

**TRAMITE DEL AMPARO:** I) La presente acción de amparo se remitió a este Tribunal con fecha: diez de agosto del año dos mil dieciocho, proveniente del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, por lo que ese mismo día se le dio trámite asimismo se resolvió **EN CUANTO AL PROVISIONAL** solicitado se esperara a tener a la vista los antecedentes; II) Con fecha: veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho se señala el plazo de cuarenta y ocho horas a las partes y terceros interesados y por considerar que las circunstancias no lo hacían aconsejable **NO SE DECRETÓ** el amparo provisional solicitado; III) Con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, se relevó del período de prueba por no estimarse necesario y se concedió audiencia por cuarenta y ocho horas a las partes para que se manifestarán con relación a la vista pública.

**DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LAS PARTES:** A) el amparista: No evacuó ninguna de las audiencias conferidas en su oportunidad, únicamente obra



el argumento presentado en el memorial inicial donde quedaron plasmados sus argumentos y petición de fondo, la cual corresponde a que se otorgue la protección constitucional solicitada, dejando en suspenso definitivo la resolución interlocutoria dictada como conclusión de la audiencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario laboral número 01173-2012-06131 y mediante la cual ordena al trabajador someterse contra su voluntad a una contratación temporal y a un cambio de condiciones de trabajo al establecer su remuneración por jornal, lo cual incumple con la debida ejecución de la sentencia recaída y somete a la indefensión al trabajador, al eliminar la protección de la tutela judicial efectiva sobre sus derechos humanos laborales y para los efectos positivos, ordene a la autoridad impugnada, cumplir debidamente con la función ejecutiva, hasta obtener el debido, pleno y efectivo cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que se ejecuta, sin perjuicio de las declaraciones que pueda estimar el tribunal necesarias para que se deduzcan otras posibles responsabilidades; **B) la parte recurrida:** no presentó alegato alguno. **C) El Ministerio Público:** solicitó que se deniegue la acción constitucional de amparo, ante la inexistencia de agravios, puesto que el acto reclamado se encuentra apegado a Derecho, siendo evidente que la pretensión del solicitante consiste en una revisión de lo actuado por el órgano jurisdiccional. **D) El tercero interesado: Procuraduría General de la Nación:** En su oportunidad expuso que el hecho que el postulante esté inconforme con el contenido de la resolución interlocutoria emitida por la autoridad impugnada, no constituye en sí un agravio que deba ser reparado por la vía del amparo, toda vez que la misma se encuentra arreglada a derecho. En ese sentido ante la inexistencia de agravio, el mismo debe ser denegado por notoriamente improcedente. .

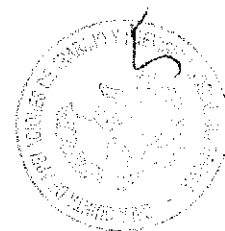


#### **CONSIDERANDO I:**

El amparo se ha instituido con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido y procederá siempre que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la constitución y las leyes garantizan, como lo determina el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Asimismo el artículo 10 de la ley de la materia regula que la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Procede el amparo en los asuntos de los ordenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

#### **CONSIDERANDO II**

En el presente caso, el postulante argumentó que promovió Juicio Ordinario Laboral, con la finalidad que se reconociera la naturaleza laboral de la relación entre el Estado de Guatemala, y como entidad nominadora, la Procuraduría General de la Nación, así también se reconociera la naturaleza continúa e ininterrumpida de la relación de trabajo; igualmente, se declarara la nulidad de pleno derecho del despido ejecutado en su contra. Con fecha trece de marzo de dos mil trece, el tribunal de primer grado declaró las pretensiones manifestadas por el postulante; inconforme con lo resuelto, la entidad patronal interpuso



recurso de apelación, mismo que fue conocido y resuelto en sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil trece, por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien confirmó la resolución de primer grado; derivado de ello, la entidad patronal interpuso una acción de amparo, mismo que termina siendo declarado con lugar por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. De tal cuenta, dejó en suspenso los actos reclamados señalados y ordenó a la Sala que dictara una nueva resolución conforme a derecho. La Sala Tercera de Trabajo y Previsión Social, en acatamiento de la sentencia de amparo, emite resolución de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis por medio de la cual revocó parcialmente la sentencia de primera instancia. Debido a que, según lo estima el postulante, la Sala referida excedió lo ordenado en la sentencia de amparo, al revocar aspectos que no fueron afectados por la sentencia de amparo, el postulante, solicitó una asistencia para la ejecución del amparo, misma que fue declarada con lugar por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, dejando así sin efecto lo resuelto por la citada Sala y ordenándose a emitir un nuevo fallo conforme a lo resuelto en amparo. En acatamiento de lo resuelto por la Cámara, la Sala aludida emitió sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por el Estado de Guatemala, conformando así la resolución de fecha trece de marzo de dos mil trece. Derivado de todo lo expuesto, con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el juzgado de primera instancia emplazó a la parte patronal a efecto que le informara lo relativo al cumplimiento de la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece. Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, la entidad





patronal presenta una solicitud requiriendo al juzgado se cite a las partes para una audiencia conciliatoria, sin hacer mención al cumplimiento de sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece. El juzgado de primer grado resuelve, con fecha once de julio de dos mil dieciocho, señalando audiencia a efectos de llegar a una posible conciliación, ante tal situación el postulante protestó y se excusó de asistir a dicha audiencia por considerar que al haber una sentencia firme y condenatoria, devenía improcedente una audiencia con carácter conciliatoria. Al momento de concluirse la audiencia, de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se emite la resolución interlocutoria señalada como acto reclamado, la cual expone el amparista, que con ella se le ordena someterse contra su voluntad a una contratación temporal y aun cambio de condiciones de trabajo, al establecer una remuneración como jornal, lo cual incumple con la debida ejecución de la sentencia, vulnerando con ello, sus derechos al debido proceso y una tutela judicial efectiva.

### **CONSIDERANDO III:**

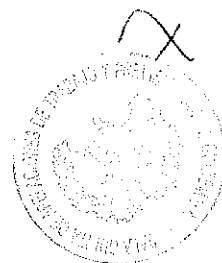
Este Tribunal del análisis de las constancias procesales, de los medios de prueba y de los agravios expuestos por el postulante, estima que el objeto del amparo es la declaratoria a la violación del derecho de defensa y del debido proceso del amparista, generadas dichas violaciones a través de la resolución interlocutoria dictada en la audiencia con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por parte del Juez Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social, a través de la cual, varió las condiciones, dictadas en la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece, fundamentalmente en lo relativo a que la relación entre las partes era de naturaleza laboral y de forma continua, restaurando los



derechos del actor en el goce de sus derechos laborales, y se le reubicara en el mismo puesto de trabajo en las mismas o mejores condiciones que las prevalecientes al veintiocho de septiembre de dos mil doce, fijándole el plazo de tres días para que cumpliera con lo ordenado al causar firmeza. Al apelar la parte demandada, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó el fallo de Primera Instancia, en sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil trece. Al estar inconforme la parte patronal, planteó Acción Constitucional de Amparo, ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, que, en sentencia de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis otorgó la protección constitucional a la entidad recurrente, pero se refería específicamente a aspectos económicos que el actor consideró no le afectaban respecto del fondo del asunto, por lo que no apeló, y la Sala Tercera de la Corte de apelaciones de Trabajo y Previsión Social en sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, a través de la cual acató la sentencia de Amparo antes descrita revocó parcialmente la Sentencia de primera instancia, habiéndose excedido en lo ordenado por la Sentencia de Amparo, revocando aspectos que no fueron afectados en dicha sentencia, lo que obligó al actor a solicitar una asistencia para la ejecución de amparo, que se declaró con lugar por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en auto de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, ordenándole a la Sala, emitir nuevo fallo apegado a lo resuelto en el Amparo, al acatar, en sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por el Estado de Guatemala, confirmando la sentencia de primera instancia, emitida con fecha trece de marzo de dos mil trece. De esa cuenta, quedó firme el fallo. En resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho el



Juzgado de primera instancia, fija el plazo de cinco días para que la parte patronal informe sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece, y la liquidación de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, resolución que no fue impugnada. Sin embargo, la parte patronal solicitó el diez de julio de dos mil dieciocho a través de memorial, que se citara a las partes a una audiencia conciliatoria, no habiendo cumplido dicha entidad con el plazo de cinco días se le fijó para que informara sobre los puntos antes indicados. Sin embargo el Juez de Primera Instancia se fundamentó en el artículo 66 literal e) de la Ley del Organismo Judicial, para dictar la resolución de fecha once de julio de dos mil dieciocho, por medio de la cual señaló audiencia para el día veintisiete de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, indicando que el objeto de ésta era llegar a una posible conciliación, a pesar de que el proceso ya se encontraba en la fase ejecutiva. Aunado a ello el Código de Trabajo, como ley específica, es la legalmente aplicable en ese momento, por lo que aplicar la ley del organismo judicial queda fuera de contexto, ya que, la ejecución, tiene elementos concretos que ya fueron discutidos en sentencia de primera y segunda instancia, y en los amparos ya señalados, no existe razón alguna para que el Juez de Primera Instancia, se atribuyera la facultad de citar a una conciliación, y a la solicitud que planteó la Procuraduría General de la Nación, que solicitó dicha conciliación, únicamente cabía denegarla, por encontrarse en la fase ejecutiva. Por tales motivos, este Tribunal Constitucional, considera que es a partir de la emisión de la resolución a través de la cual se señaló la audiencia conciliatoria, que se evidencia la Violación al Derecho de Defensa de la parte actora, puesto que al encontrarse el proceso en fase ejecutiva, no era posible que se pudiera impugnar ésta, como lo establece el artículo 427 del Código de Trabajo, a través de los



recursos que la ley le provee al actor, contenidos en el artículo 365 del Código de Trabajo, también es evidente que a partir de ése momento se vulnera el Debido proceso, puesto que el Juzgador varía las formas esenciales del proceso, creando un procedimiento que por mandato legal, no procede, puesto que su única obligación era, garantizar y hacer efectiva la ejecución de la Sentencia. Así mismo, se advierte que la parte actora, protestó sobre el señalamiento de dicha audiencia, excusándose además de asistir a la misma, y en resolución de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la autoridad impugnada reprograma o señala nueva audiencia para el tres de agosto de dos mil dieciocho a las diez de la mañana, con los mismos lineamientos de la anterior. Es durante el desarrollo de dicha audiencia, que se puede determinar que el Juez persiste en la violación al derecho de defensa y del debido proceso del actor, ya que la audiencia se había solicitado para llevar a cabo una posible conciliación, sin embargo realmente la intención era la verificación del cumplimiento de la sentencia, procedimiento o etapa procesal que no está contemplada dentro del trámite del procedimiento laboral para la fase ejecutiva, y al escuchar y ver el audio de la referida audiencia, se puede determinar que en realidad la Procuraduría General de la Nación, no tenía la intención de negociación alguna, sino más bien, variar el procedimiento establecido, ya que solicitaba que se dejara sin efecto la liquidación y se dictara una nueva, y solicitando además que el actor aceptara ser contratado bajo el reglón cero veintinueve. Sin embargo, el corolario de dichas violaciones, se configura, al momento en que el Juez, dicta la resolución interlocutoria que la parte actora, a través del presente amparo, solicita se deje en suspenso, ya que a través de ésta, modifica la sentencia de primera y segunda instancia y las sentencias de amparo que confirmaron las sentencias



relacionadas, ordenando que el actor sea incluido dentro de un reglón de carácter temporal, generando así la violación del derecho del actor, que fue precisamente el propósito del planteamiento del juicio ordinario de mérito, es decir, la declaración de una relación contractual de plazo fijo, que contradice lo resuelto y firme que es, la relación laboral es de carácter permanente, en ese sentido, la conducta del Juez reprochado es arbitraria, como lo califica la Corte de Constitucionalidad, porque está ejerciendo coerción sobre el trabajador para que se someta a la voluntad simulatoria del patrono, constituyéndose en un abuso de la facultad jurisdiccional del Órgano Jurisdiccional, puesto que, si el actor acepta tal resolución, está aceptando una relación de carácter temporal, y arriesgando la estabilidad laboral que ganó, con base en los fallos dictados en las diferentes instancias en la que se declaró su derecho sobre la reinstalación y el carácter permanente de la relación laboral. El otro punto toral, es que el argumento de la parte demandada respecto de la limitación para cumplir con lo ordenado en la sentencia de primera instancia es a causa de la ausencia de previsión presupuestaria para hacer frente a una reinstalación ordenada; en casos de relaciones simuladas, la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que tal ausencia de previsión es responsabilidad del patrono, derivada de su voluntad de violar la ley al simular la relación, por lo que serán las autoridades las obligadas a propiciar las condiciones necesarias y conducentes para dar debido cumplimiento a la orden de reinstalación, fallos contenidos en la Sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis guión dos mil trece, así mismo las sentencias dictadas dentro de los expedientes tres mil seiscientos doce guión dos mil trece, tres mil seiscientos ochenta y uno guión dos mil trece,



tres mil novecientos ochenta guión dos mil trece, cuatro mil ciento ochenta y seis guión dos mil trece, cuatro mil doscientos setenta y nueve guión dos mil trece, cuatro mil trescientos dos guión dos mil trece, cuatro mil trescientos ochenta y cinco guión dos mil trece, cinco mil ochocientos veinticuatro guión dos mil trece, un mil setecientos siete guión dos mil catorce, dos mil seiscientos treinta y dos guión dos mil catorce, dos mil seiscientos cuarenta guión dos mil catorce, dos mil seiscientos cuarenta y dos guión dos mil catorce, dos mil setecientos sesenta y cinco guión dos mil catorce, tres mil dieciocho guión dos mil catorce, tres mil ciento catorce guión dos mil catorce, tres mil trescientos setenta y cinco guión dos mil catorce, tres mil quinientos sesenta y siete guión dos mil catorce, tres mil setecientos treinta y tres guión dos mil catorce, tres mil setecientos cuarenta y cuatro guión dos mil catorce, cuatro mil ochenta guión dos mil catorce, cuatro mil trescientos ochenta y nueve guión dos mil catorce, cuatro mil novecientos ochenta guión dos mil catorce, tres mil doscientos setenta y cuatro guión dos mil quince, tres mil trescientos ocho dos mil quince, tres mil cuatrocientos veintinueve guión dos mil quince, tres mil trescientos ochenta guión dos mil quince, cinco mil quinientos ochenta y ocho guión dos mil quince, treinta y tres guión dos mil dieciséis, trescientos ochenta y siete guión dos mil dieciséis, trescientos ochenta y siete guión dos mil dieciséis y seiscientos dieciséis guión dos mil dieciséis. En ese sentido, al Juzgador únicamente le corresponde cumplir con lo ordenado en el artículo 425 del Código de Trabajo, de ejecutar la sentencia. Las violaciones señaladas, determinan que debe acogerse el Amparo planteado por la parte actora, en contra de la resolución interlocutoria de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, la cual se deja en suspenso, por violación al derecho de defensa y el debido proceso, tutela judicial efectiva, legalidad, tutelaridad, irrenunciabilidad de



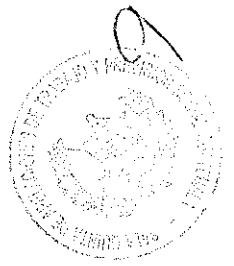
los derechos laborales, contenidas en los artículos 2, 5, 12, 44, 46, 102, 103, 106, 152, 154, 155, 203, 204, 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 326, 340 y 425 del Código de Trabajo, y consecuentemente no causa efecto legal alguno, restaurando al actor en sus derechos al evidenciarse la existencia de agravio que lesionó derechos y garantías constitucionales del actor, debiendo suspender la resolución de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho.

#### **CONSIDERANDO IV:**

De conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los tribunales de amparo decidirán sobre las costas y la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. Por lo que en el presente caso, este tribunal hace su pronunciamiento en relación a éstas en la parte resolutive del presente fallo.

**LEYES APLICABLES:** Artículos citados y 1º, 2º, 12, 28, 29, de la Constitución Política de la República; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10, 13 inciso b), 19, 20, 33, 42, 43, 44, 46, 47, 57, y 186 último párrafo de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1º, 10, 57, 58, 86, 87, 88, 141, 142, 143, 147, 148 de la Ley del Organismo Judicial; 7, 8, 29, 35, 47, 72 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad; Expediente 1818-2013. Sentencia de fecha 19-02-2014.

**POR TANTO:** Esta Sala Constituida en Tribunal de Amparo, con fundamento en lo considerado y disposiciones legales invocada al resolver: DECLARA: I) OTORGA el Amparo solicitado por Carlos Ernesto Sánchez Cáceres, en contra del Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social; II) Deja en suspenso en forma definitiva en cuanto al amparista, la resolución de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio ordinario laboral número: cero un mil ciento setenta y tres, guión dos mil doce, guión cero seis mil ciento treinta y



uno (01173-2015-06131); III) Para los efectos positivos de esta sentencia, la autoridad reprochada debe dictar dentro de los cinco días siguientes a que reciba la ejecutoria y sus antecedentes, otra resolución observando debidamente lo considerado en este fallo, bajo apercibimiento de incurrir en multa de dos mil quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades en caso de no acatar lo resuelto; IV) No hay condena en costas; V) Notifíquese, y en su oportunidad compúlsese copia certificada de este fallo a la autoridad impugnada y a la Honorable Corte de Constitucionalidad en cumplimiento con el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para los efectos legales correspondientes

César Augusto López López  
Magistrado Presidente

Aracely Amaya Fabián  
Magistrada Vocal I

Fausto Fernando Maldonado Méndez  
Magistrado Vocal II

Mayra Alejandra Padilla Borrayo  
Secretaria





Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación - DPI -

**CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN**

- CUM -

**1820 63852 1406**

NONISRE:

NELSON  
GEOVAN

APPELL CO.

ALVAREZ  
TOBAR

**SEXO:**

**MASCULINO**

**NACIONALIDAD**  
**COLATEM**

**DATA DE NASCIMENTO**

21FEB1981

00-

FIRM

**LUGAR DE NACIMIENTO:**

**CHICHIAS I E VIVA  
QUICHE**

## GUIDELINES

## VEICINDAD

GUATEMALA  
GUATEMALA

**NÚMERO DE CEDULA**

N-14 63826



SOLTER

FECHA DE VENCIMENTO

2/ABRZ  
NAC.

1

2004

101

1600

^  
^  
^  
^

...

IDGTM18206385271406S0101<<396  
8102210M2004275GTM<<1009192192  
ALVAREZ<<NELSON<<<<<<<<<<<

